

se surtió en México el fuero: que aun cuando el C. Lic. Mariano Antúnes, Juez 2º de lo civil de esta ciudad, no fuese competente por razon del domicilio de los demandados, ni por la del lugar del contrato y la de hallarse en México aquellos cuando la demanda se interpuso, el Juez mencionado habria sido competente, por que los demandados le prorogan jurisdiccion; ya por no haber opuesto declinatoria; ya por no haber protestado no prorogar la jurisdiccion ya por que lejos de esto, consintieron la jurisdiccion, tanto señalando ellos mismos la hacienda de Tochatlaco para que en ella se practicara la ejecucion, cuanto admitiendo que el juicio siguiera por todos sus trámites hasta pronunciarse la sentencia de remate, y llegando hasta el caso de nombrar perito valuador de la cosa embargada y de que se fijaran dias para las almonedas, verificándose una de ellas: que aunque la finca embargada se halle en jurisdiccion de Apam, la accion que se ejerce en juicio es personal y no real; y que concurriendo el fuero del domicilio y el de la ubicacion de la cosa, es preferente el primero, así como que cuando concurren dos fueros diversos, toca al actor elegir entre ellos; de conformidad con lo dispuesto en la ley citada con la Doctrina de Peña y Peña Dec. de fracforen. Tomo 2º num. 201 y siguientes y con lo pedido por el C. Fiscal se declara:

Primero: que el Juez 2º del ramo de lo civil de esta ciudad es el competente para seguir conociendo del juicio indicado.

Segundo: Que no hay condenacion de costas.

Tercero: Que se remita copia á cada uno de los Jueces contendientes, para los efectos que corresponden, haciéndose saber y archivándose á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—J. M. Lafra-

gua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—Luis Mª Aguilar, secretario.

Son copias. México, Mayo treinta de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

COMPETENCIA

Promovida por el Juez de 1ª instancia de Apam en el Estado de Hidalgo al 2º de lo civil de México, para conocer de la ejecucion de la sentencia de remate del rancho llamado «Loma de Tlamalapam», anexo á la hacienda de San José el Grande, en la municipalidad de Tepeapulco jurisdiccion de Apam, en el juicio que por D. Fernando Romero, sigue D. Juan Manuel García, ante el Juzgado 2º de lo civil de esta Ciudad, contra D. Luis Elizalde.

PRELIMINARIO FISCAL.

El Fiscal dice: que el Juez de 1ª instancia de Apam, ha promovido competencia al 2º de lo civil de México, para ejecutar la sentencia de remate pronunciada por el referido Juez de México, de una parte de la hacienda de San José el Grande, ubicada en la jurisdiccion de Apam, en el Estado de Hidalgo.

El negocio que dió lugar á dicha sentencia, es el siguiente:

En 16 de Octubre de 1868, el C. García se presentó al Juez 6º de lo civil de México, pidiendo libranza ejecucion contra el C. Elizalde, por la cantidad de mil novecientos pesos, valor de unas libranzas; con mas, los réditos correspondientes á razon de un cuatro por ciento mensual. Practicado el reconocimiento por el deudor, y confesada la deuda, la parte de Romero pidió el auto de exequendo. Librado éste, se procedió á la diligencia de embargo, y en

ella el ejecutado señaló para la traba de la ejecución, el rancho llamado «Loma de Tlanalapan,» anexo á la hacienda de San José el Grande. Trascurridos los términos de la ejecución, sin que el ejecutado alegara ninguna excepcion, el actor pidió se encargaran los diez días de la ley, á fin de probar en ellos que el deudor habia convenido en pagarle los réditos reclamados y que á este fin se le entregaran los autos para alegar; el autor produjo su alegato, mas la contraria no lo hizo y hubo necesidad de acusarlo rebeldía para que entregara los autos, como se hizo en efecto, pero sin escrito.

En tal estado del negocio, el ejecutante recusó al Juez 6º y los autos pasaron al Juez 2º, el cual en rebeldía del ejecutado, dió por producido el alegato de éste y mandó citar para sentencia. Esta se pronunció en 18 de Mayo de 1869, previniéndose en ella, se llevara adelante la ejecución decretada. Pasado el término que la ley concede para apelar, sin que el ejecutor interpusiera ningun recurso, el actor pidió se declarara consentida la sentencia de remate, y se notificara á la contraria que dentro de veinticuatro horas nombrara su respectivo perito, bajo apercibimiento de ley. En rebeldía del deudor, el Juzgado hizo ese nombramiento. Entonces el Lic. Piña y Cuevas, presentó un escrito al Juzgado, en el que se quejaba de que habiendo evacuado el alegato, no se le hubiera hecho saber resolucion ni trámite alguno; pidiendo por lo mismo, se suspendiera el curso del negocio y se le entregaran los autos por un breve término, dando esto por resultado que el Lic. Piña y Cuevas interpusiera recurso de apelacion, pretendiendo que procediera en ambos efectos. Sustanciado el artículo, se declaró sin lugar.

Expedita así la vía de apremio, y á solicitud del ejecutante, procedieron los peritos á ejecutar el valúo, llevando consigo un exhorto para el Juez de Apam para que les impartiera auxilio en caso necesario, y

cuyo exhorto fué obsequiado en todas sus partes.

Presentado y ratificado el valúo de los peritos á solicitud del actor, se señalaron días para las almonedas de las que solo pudo verificarse la primera, porque en esas circunstancias el Juez de los autos recibió un oficio inhibitorio del Juez de Apam y en el que á solicitud del deudor C. Elizalde, le iniciaba competencia para ejecutar la sentencia de remate que con anterioridad se habia pronunciado por el Juez de México.

Como se vé por lo expuesto, este negocio tiene una semejanza absoluta con el de la competencia suscitada por el mismo Juez de Apam al propio Juez 2º de México, para ejecutar la sentencia de remate de un rancho perteneciente á la hacienda de San Pedro Tochatlaco; la razon que ambos Jueces alegan en apoyo de sus respectivas jurisdicciones, son idénticas, y por lo mismo no es de extrañar que el fiscal reproduzca en el presente caso las mismas razones que adujo en ese negocio de Tochatlaco. En su concepto, ni en uno ni en otro ha habido ninguna razon ni siquiera aparente que sirviera de fundamento al Juez de Apam para suscitarse estas competencias. Estas, lo mismo que algunas otras que el fiscal pudiera citar, solo revelan cierta obstinacion en sostener principios exajerados que en manera alguna pueden aplicarse rectamente á nuestras propias y exclusivas instituciones.

El Juez de Apam no comprende ó por lo menos afecta no comprender, que la Soberanía de los Estados, tiene una limitacion muy marcada no solo en varios artículos de la Constitucion general, sino repetida en todas y cada una de las constituciones de los Estados. En efecto, esa limitacion no es otra que la que previene expresamente que los Estados sean libres y soberanos en todo lo que concierne á su organizacion y régimen interior. El art. 1º título 1º de la misma Constitucion del

Estado de Hidalgo, dice á la letra. «El Estado de Hidalgo es libre, soberano é independiente, en todo lo que concierne á su régimen interior.» Como se vé de estas terminantes palabras, es imposible poner en duda que todas aquellas cuestiones, todos aquellos actos ó procedimientos que no estén íntimamente enlazados con la economía y régimen interior del Estado, sino que tengan relacion con los de otro Estado distinto, que por decirlo así afectan los intereses de otro, ya no puede decirse que estén sujetos á la jurisdiccion de ese Estado ni que ataquen su soberanía. Entonces es cuando precisamente está limitada esa Soberanía y ese Estado tiene que sujetarse á las disposiciones comunes á que se sujetan todos los otros de la Federacion.

Fundado en estas consideraciones, y haciendo suyas las razones alegadas por el Juzgado 2º de lo civil de México, en apoyo de su respectiva jurisdiccion, el Fiscal concluye, sujetando á la deliberacion de esta respetable Sala, la siguiente proposicion.

UNICA:

Se declara que el Juez 2º de lo civil de México, es el competente para ejecutar y hacer efectiva la sentencia de remate del rancho de «Lomas de Tlanalapam», pronunciada en el juicio ejecutivo que D. Fernando Romero sigue contra el C. Luis Elizalde, sobre pesos.

México, Abril veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el Juez de 1ª instancia de Apam en el Estado de Hidalgo, al 2º de lo civil de México, para conocer de la ejecucion de la senten-

cia de remate del rancho llamado «Loma de Tlanalapam» anexo á la hacienda de San José el Grande en la municipalidad de Tepeapulco, jurisdiccion de Apam, en el juicio que por D. Fernando Romero sigue D. Juan Manuel García ante el Juzgado 2º de lo civil de esta ciudad, contra D. Luis Elizalde: lo expuesto por las partes en apoyo de la respectiva jurisdiccion: los informes de los Jueces contendientes con lo pedido por el C. Fiscal: oido lo alegado ante esta 1ª sala, al tiempo de la vista por los CC. licenciados, Jesus M. Aguilar, en favor de la jurisdiccion del Juez de Apam y Remigio Tellez en favor de la del C. Juez 2º de lo civil de esta ciudad; y visto todo lo demás que convino: Considerando: que segun consta de autos y expone el C. Juez 2º de lo civil de esta ciudad, los demandados tienen su domicilio en ella y por esta razon el Juez referido tiene jurisdiccion para conocer del negocio, segun la ley 32, título 2º partida 3ª; que como refiere el propio Juez y tambien consta en autos, el contrato cuya falta de cumplimiento dió lugar al juicio, se celebró en esta ciudad, y el demandado se hallaba en ella á la vez en que se interpuso la demanda; por lo cual, con arreglo á la misma ley, se surtió en México el fuero: que aun cuando el C. Lic. Mariano Antunez, Juez 2º de lo civil de esta ciudad no fuese competente por razon del domicilio del demandado, ni por la del lugar del contrato y la de hallarse en México aquel cuando la demanda se interpuso, el Juez mencionado habria sido competente, porque el demandado le prorogó jurisdiccion, ya por no haber opuesto declinatoria, ya por no haber protestado no prorogar la jurisdiccion, ya por que léjos de esto consintió la jurisdiccion, tanto señalando á mismo el rancho llamado «Loma de Tlanalapam» para que en él se practicara la ejecucion, cuanto admitiendo que el juicio se siguiera por todos sus trámites hasta pronunciarse la sentencia de remate y llegando hasta el caso de nombrar peri-

to valuator de la cosa embargada, y de que se fijasen días para las almonedas, verificándose una de ellas: que aunque la finca embargada se halle en jurisdicción de Apam, la acción que se ejercita en juicio es personal y no real; y que concurriendo el fuero del domicilio y el de la ubicación de la cosa, es preferente el primero, así como que cuando concurren dos fueros diversos, toca al autor elegir entre ellos; de conformidad con lo dispuesto en la ley citada, con la Doctrina de Peña y Peña Lec. de práctica forense, tomo 2º núm. 201 y siguientes, y con lo pedido por el C. Fiscal, se declara:

Primero: que el Juez 2º del ramo de lo civil de esta ciudad, es competente para seguir conociendo del juicio indicado.

Segundo: que no hay condenación de costas.

Tercero: que se remita copia de esta sentencia, á cada uno de los Jueces contendientes, para los efectos que corresponden haciéndose saber y archivándose á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafraqua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Mayo treinta de mil ochocientos setenta y uno.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por Dª Demetria Almeida, contra el C. Gobernador del Estado, que mandó juzgar militarmente á su esposo, C. José Asuncion Lara.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Doña Demetria Almeida, en nombre y

representación de su esposo D. José Asuncion Lara, pretende que V. ampare y proteja á éste contra el acto del ejecutivo del Estado, que lo tiene preso é incomunicado por presunciones de haber dado fuego á unos cohetes, en la plaza principal de esta ciudad, la noche del diez del corriente.

A la fecha en que se presentó el recurso de amparo, según lo que en él mismo se expresa, el individuo á cuyo favor se interpone, aun solo hacia dos días que se hallaba preso; por consiguiente, no podía decirse violada en él la garantía que otorga el artículo 19 de la Constitución que previene que ninguna detención exceda de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. No existiendo, pues, la violación de esta garantía que era en lo que podía consistir el fundamento legal del amparo, conforme á la ley de 29 de Enero de 1869; y estando sujeto D. José Asuncion Lara, en cuyo nombre se invoca, á un procedimiento criminal, según la comunicación informativa del C. Gobernador, contra quien se reclama el acto, el fiscal es de opinión que no debe concederse, por improcedente, el recurso de que se trata; porque si como se asegura en el escrito en que se interpone, la autoridad que mantiene en prisión al Sr. Lara, no es competente para juzgar el delito que se le atribuye, esta cuestión podrá ser materia de una competencia, pero no de un amparo cuyo objeto está circunscrito á los tres únicos casos que expresa el artículo 1º de la citada ley orgánica de 20 de Enero, y de los cuales ninguno es aplicable al presente, pues mal podría decirse que la autoridad del Estado, por el hecho de estar siguiendo el indicado procedimiento, invade la esfera de la federal, cuando primero debería decidirse de parte de quién está la competencia, siempre que V., creyendo tenerla en el delito que motiva el juicio, quisiese sostenerla para conocer de él. Por estos fundamentos el fiscal concluye y pide que declare V. que la Justicia de la Unión: